

Colombia 2026: lo que las urnas nos enseñan sobre gobernar un país partido

Alvaro Felipe Bayona Sierra, Colombia, XII Edición

El 21 de junio, Colombia eligió presidente por menos de un punto de diferencia. El dato más elocuente, sin embargo, no está en ese margen: está en que millones de colombianos que llevaban décadas sin ir a votar decidieron hacerlo este año, muchos de ellos en los municipios donde el Estado ha estado históricamente más ausente.

Las elecciones presidenciales de 2026 dejan un país exactamente donde temíamos que estuviera: partido casi al medio. Abelardo de la Espriella se impuso a Iván Cepeda por apenas un punto porcentual en segunda vuelta, después de que ninguno de los catorce candidatos lograra la mayoría absoluta en primera vuelta. Pero reducir la lectura de este proceso a quién ganó sería desperdiciar la que quizás sea su enseñanza más valiosa para quienes trabajamos por lo público: cómo votó Colombia nos dice más que por quién votó.

La participación que nadie esperaba

El dato duro es contundente: la primera vuelta registró una participación del 57,9% del censo electoral, muy por encima del promedio histórico cercano al 50%. Pero el promedio nacional esconde la verdadera noticia, que está en el territorio. En municipios como Balboa (Cauca), la participación pasó de 37,7% en 2022 a 81,6% en 2026. En El Tambo, de 32,5% a 73,3%. En Guamal (Meta), la asistencia a las urnas prácticamente se triplicó.

No son casualidades estadísticas. Son, muchas veces, los mismos territorios donde la presencia del Estado ha sido más débil y donde la violencia ha determinado durante años quién puede votar y quién no. Que ese electorado haya decidido masivamente reclamar su lugar en la decisión nacional es, al mismo tiempo, una noticia esperanzadora y una exigencia clara: la gente está dispuesta a confiar en las instituciones democráticas incluso donde el Estado ha llegado tarde o a medias. Ese capital de confianza no se administra solo, se cuida.

La polarización no vació las urnas, las llenó

Otro aprendizaje contraintuitivo: el voto en blanco se mantuvo en apenas 1,71%, una cifra baja para una elección tan disputada. En elecciones anteriores marcadas por la polarización, buena parte del electorado de centro solía refugiarse en el voto en blanco o simplemente no votaba. Esta vez ocurrió lo contrario: la confrontación entre proyectos antagónicos empujó a ese mismo electorado a tomar partido, ya fuera por convicción o por voto útil.

Esto importa para quienes diseñamos política pública: la polarización, cuando se traduce en participación real y no en abstención o indiferencia, puede ser leída como un signo de vitalidad democrática, aunque incomode. El desafío que deja no es reducir la polarización a golpe de discurso, sino construir instituciones capaces de gobernar con un país dividido casi en dos mitades estables, sin que cada ciclo electoral se convierta en una batalla existencial.

La seguridad volvió a ser la primera pregunta

Los datos de opinión previos a la elección mostraban algo que los resultados terminaron confirmando: la seguridad desplazó a la economía como principal preocupación ciudadana. Según mediciones de Invamer, siete de cada diez colombianos considera que el Estado perdió control territorial frente a los grupos armados ilegales, cuyo número de integrantes creció por encima del 20% en el último año, superando los 27.000 combatientes, según estimaciones de la Fundación Ideas para la Paz.

Este dato territorial es, quizás, el más importante para la función pública: la legitimidad del Estado no se juega únicamente en Bogotá ni en los grandes indicadores macroeconómicos, sino en si un alcalde, un maestro rural o un funcionario de salud pueden ejercer su labor sin que un actor armado decida por ellos. La discusión sobre seguridad que dominó esta campaña no fue una discusión ideológica abstracta: fue, en el fondo, una discusión sobre dónde termina y dónde empieza la presencia efectiva del Estado.

Gobernar con déficit, gobernar con desconfianza

El presidente electo asumirá el 7 de agosto con una herencia fiscal exigente: un déficit cercano al 6,4% del PIB, una de las deudas públicas más altas de la región y sistemas de salud y educación con tensiones estructurales no resueltas. A esto se suma un clima de desconfianza institucional: durante el conteo, tanto en primera como en segunda vuelta, hubo cuestionamientos públicos sobre la transmisión de resultados, que las autoridades electorales debieron responder en tiempo real para sostener la credibilidad del proceso.

La lección aquí es doble. Primero, que la solidez de una democracia no se mide solo por la limpieza técnica de un escrutinio, sino por la capacidad de las instituciones de comunicar esa limpieza de forma creíble en medio de la tensión política, minuto a minuto. Segundo, que ningún gobierno que asuma en este contexto podrá darse el lujo de gestionar solo con discurso: los márgenes fiscales para improvisar son mínimos, y la ciudadanía —más movilizadora que nunca— exigirá resultados concretos, no solo relatos.

Una prospectiva para quienes servimos lo público

Si algo deja esta elección para quienes creemos en la función pública como vocación y no solo como empleo, es una hoja de ruta con tres ejes:

Cerrar la brecha territorial de confianza. Los municipios que más aumentaron su participación son, en muchos casos, los que menos institucionalidad han tenido. Ahí hay una oportunidad concreta: invertir capacidad técnica y presencia estatal donde la ciudadanía acaba de demostrar que está dispuesta a creer de nuevo.

Separar seguridad de propaganda. El diagnóstico ciudadano sobre pérdida de control territorial no se resuelve con eslóganes de “mano dura” ni con discursos de pacifismo abstracto, sino con política pública sostenida, medible y coordinada entre defensa, justicia y desarrollo rural.

Gestionar la fractura, no negarla. Un margen de un punto no es una anomalía a corregir en la próxima elección: es el retrato actual de un país. La función pública tendrá que aprender a construir política sostenible en contextos de mayoría estrecha, algo que exige más diálogo técnico entre bloques y menos gobierno por decreto de la mitad contra la otra mitad.

Colombia no salió de esta elección con un veredicto unánime sobre su rumbo. Salió, en cambio, con un mandato mucho más exigente: el de una ciudadanía que, pese a la violencia, la desconfianza y el desgaste, decidió masivamente que todavía vale la pena ir a votar. Corresponde ahora a quienes ejercemos lo público estar a la altura de esa confianza, territorio por territorio.